



Genaro Arriagada y el terrorismo

“El gobierno debe ser implacable”

Odette Magnet

Vehemente, con una gran facilidad de expresión, transmite una seguridad a toda prueba en sus juicios. Genaro Arriagada (cientista político, vicepresidente de la Democracia Cristiana, director del recién estrenado Programa de Asesoría Legislativa, destinado a los parlamentarios de la Concertación) habla de convicciones, certezas y franquezas. Se podrá o no estar de acuerdo con él, pero su análisis político del momento actual no es ignorado, ni mucho menos, a la hora de revisar la realidad nacional.

El tema del terrorismo y la seguridad pública resultó ineludible en la entrevista con APSI, cuando pocos días antes había sido asesinado el senador Jaime Guzmán. Más aún, fue Genaro Arriagada uno de los dirigentes que estuvo en el último debate de *Sin Protocolo*, el miércoles 27 pasado, con el líder de la UDI.

Arriagada reconoce que siempre tuvo profundas discrepancias con Guzmán, pero no vaciló en definirlo como “un hombre excepcionalmente dotado para la política, un orientador de debates, un generador de ideas. Me sorprendió su inteligencia, su discurso bien articulado”. Se conocieron a comienzos de la década del 70, no compartieron ideas, pero sí amigos comunes. Arriagada aclara que “nunca tuvimos un debate ácido, fuimos adversarios, pero jamás entramos en los ataques personales”.

—El signo más claro de la ola terrorista que azota al país es el asesinato del senador Guzmán. ¿Cómo pudo llegarse a esto, a un año de gobierno democrático?

—Lo primero que hay que decir es que buscarle la racionalidad al terrorismo es imposible. El terrorismo es la expresión más cruda de la violencia y, normalmente, las motivaciones de los terroristas corresponden a lo que es su tipología psicológica y moral. Yo he definido, sistemáticamente, a los terroristas como elementos perturbados ética y psicológi-

camente. Su lógica no tiene nada que ver con la de las personas normales.

—¿Pero cómo se explica hoy, cuando la gente quiere que desaparezca la amenaza terrorista y de la violencia?

—En este cuadro hay gente que sostiene que hay que usar la lógica de la conveniencia. ¿Cuál es el caso típico? Cuando se pensó en los autores del asesinato de Orlando Letelier, en ese momento la tesis que se intentó acuñar fue decir: “Esto no puede haber sido cometido sino por terroristas de ultrazquierda, porque el crimen le va a causar tanto daño al gobierno de Pinochet”. Y, sin embargo, está fuera de toda duda que una repartición ligada al gobierno militar chileno—como fue la DINA—estuvo vinculada al asesinato.

“Lo que el gobierno anterior tenía como policía política era de tal modo malo, que tuvo que disolverlo. Este gobierno ha debido partir de cero”.

—¿Qué tesis baraja usted ahora ante el asesinato de Guzmán?

—En este contexto, hay personas que arguyen que hay que emplear la misma lógica, pero en un sentido inverso. Es decir, este acto debió ser obra de los enemigos del gobierno de Aylwin. En esta materia quiero decir, con toda franqueza, que de cualquier ultra—la izquierda o la derecha—, yo espero conductas absolutamente irracionales. Además, creo que la ultrazquierda, históricamente, ha escrito siempre el libreto que desean los peores intereses de la derecha. Y si no, le diría a alguien ligado al marxismo ortodoxo que se vuelva a leer los escritos de Lenin sobre el comportamiento de la ultrazquierda. Yo no tengo la certeza, pero sí la convicción, de que en este asesinato, una vez más, la ultrazquierda escribió el libreto que anhelaba

la derecha.

—¿Qué elementos tiene para asegurar esto?

—Tengo la convicción de que en este momento hay una gran irracionalidad en los grupos de ultrazquierda. Nosotros creemos que, en el último tiempo, ha habido un recrudescimiento muy fuerte de la actividad de estos grupos.

—¿Y esa irracionalidad no podría haber alcanzado a la ultraderecha? Porque también cabría preguntarse qué ganaría la derecha con este asesinato.

—Ese es el problema. El argumento de la conveniencia podría llevar al argumento de que según a quien conviene, esto determina el autor. Eso habría llevado a la idea de que el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic lo cometió la ultraderecha. El asesinato de Letelier, la ultrazquierda. El de Guzmán, la ultraderecha. Tratándose de elementos tan perturbados como éstos, el elemento de la conveniencia termina, generalmente, siendo destruido por las evidencias posteriores.

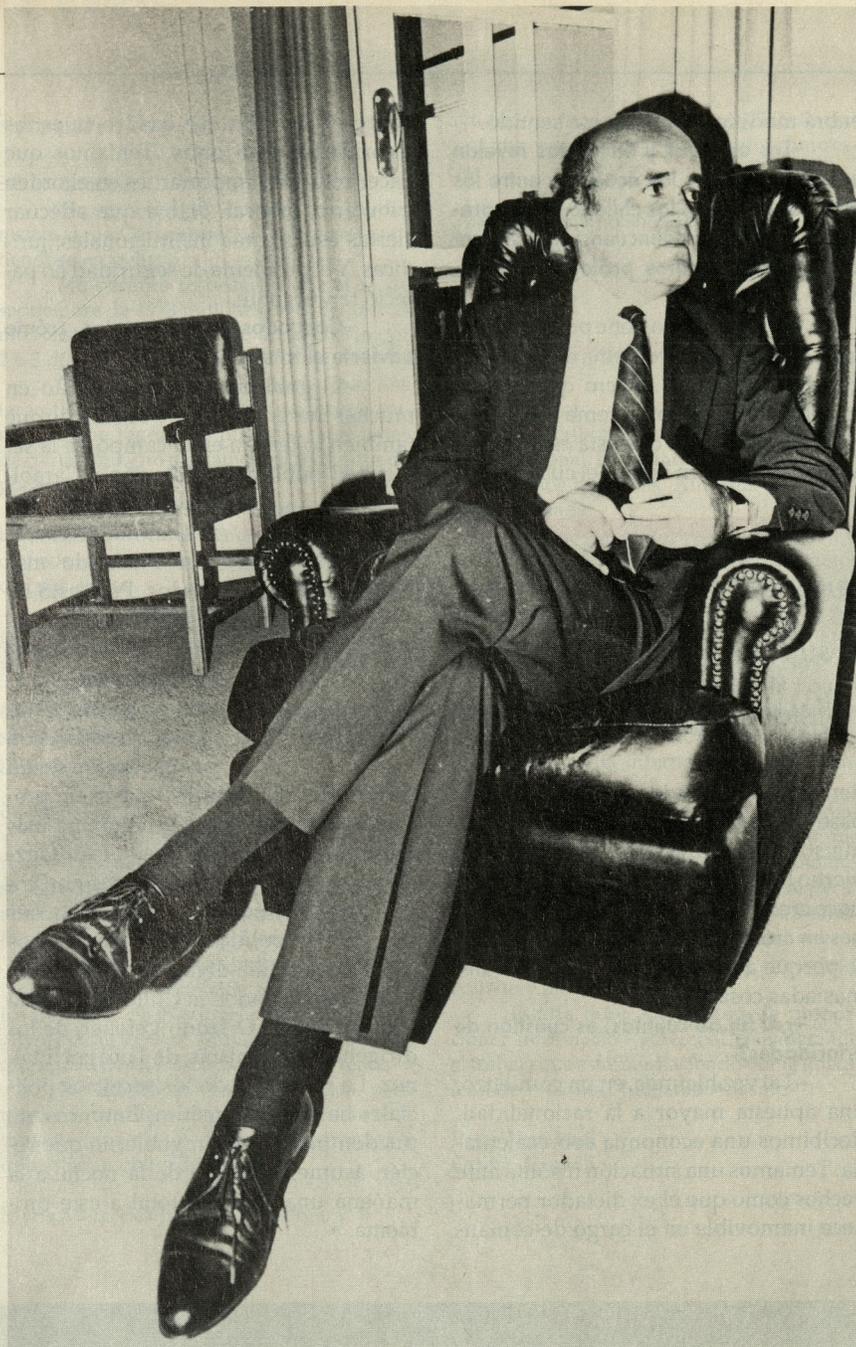
—Está también el atentado al general Leigh. Ha pasado un año y no se sabe de culpables.

—El país y los partidos políticos vinculados a la Concertación están conscientes de que estamos en presencia de una doble amenaza. Por un lado, la de los sectores de ultraderecha, que en la vida política chilena tienen una larga tradición, que empieza por el año 70 con el general Schneider. Y que se expresa, además, durante todo el período del régimen militar. Por otro, hay una larguísima tradición de atentados de la ultrazquierda que nadie puede dejar de mencionar. Y, en consecuencia, hay una gran masa sensata del país que está flanqueada por dos conductas criminales e irracionales.

—Pareciera, por las informaciones que maneja el gobierno, que se descarta la participación de la ultraderecha en este último atentado.

—Nadie lo descarta. Aquí hay dos grupos de alta peligrosidad: por un lado

Marcos Guíñez



con este mal. Aquí el gobierno tiene que ser muy firme, implacable. Y se están haciendo los mayores esfuerzos en este campo. Pero hay que tener presente que el actual régimen heredó una situación extraordinariamente difícil. Porque, ¿cuándo era más fuerte el terrorismo de izquierda? ¿El 11 de marzo de 1991 o el año 1970? Ciertamente, se cumplió lo que siempre le criticamos al gobierno autoritario: que bajo la persecución de las policías políticas más brutales —léase la DINA o la CNI—, se desarrollan los mejores grupos terroristas.

—¿Cómo responde a la acusación de la derecha política que sostiene que el gobierno ha sido débil, o al menos tardío, en enfrentar el terrorismo?

—Hay una gran dosis de injusticia en eso. En primer lugar porque lo que el gobierno anterior tenía como policía política antiterrorista era de tal modo malo que tuvo que disolverlo. Segundo, los servicios de Carabineros e Investigaciones fueron bastante desmantelados como servicios de inteligencia. Entonces, este gobierno ha tenido que partir de cero. Me parece complicado que aquellos que no criticaron el muy mal manejo de las policías de seguridad del gobierno anterior, pretendan que éste —en un solo año— pudiera enfrentar una situación extraordinariamente difícil. Y esta situación no la ha creado Patricio Aylwin ni su gobierno entre el 11 de marzo de 1990 y ahora.

—¿Es decir, el terrorismo y la violencia parecieran ser el precio ineludible de una transición a la democracia?

—Toda transición a la democracia se encuentra con este problema. Porque la democracia puede ser una aspiración del 95 por ciento de un país, pero es una amenaza políticamente mortal para un 2,5 por ciento en cada punta del espectro político. Aquí hay una ultraizquierda que sabe que el día que haya democracia plena, simplemente va a imperar una lógica que la deja fuera del cuadro. Porque su lógica descansa en las armas, la violencia y la intolerancia. La democracia es su muerte política. Al otro lado, una ultraderecha que añora la dictadura, los estados de emergencia, la violencia de otro signo. La democracia para ellos es un enemigo. Toda transición a la democracia encontrará que tiene —en ambas puntas— dos enemigos implacables.

—Y entremedio, a juicio de algunos, el gobierno y el país se encuentra en una especie de punto muerto...

el FMR (A) y el grupo Lautaro y, por otro, aquellos grupos vinculados a los anteriores servicios de seguridad.

—Sin embargo, el FMR (A) negó toda vinculación con el atentado. ¿Qué credibilidad tienen, a su juicio, esas declaraciones?

—A mí no me corresponde estar calificando los comunicados de grupos que están fuera de la legalidad y las razones por las cuales asumen ciertos actos y repudian otros.

—¿Les cree o no les cree?

—No les creo. Porque en este mundo de la clandestinidad se dan las circunstancias más sórdidas. Grupos que se atribuyen ciertos actos, grupos que

atribuyen a otros ciertos actos que cometen ellos, infiltraciones de todo tipo. Es como el mundo del delito común. Muchas veces en este mundo el límite que separa al delincuente común del policía, al cabo de ciertos años, de repente, pasa a ser una frontera poco conocida. Las líneas divisorias entre ultraderecha y ultraizquierda, entre servicios de seguridad y regímenes brutales y grupos terroristas de otro lado, son muy difusas.

—¿Qué se hace para encontrar la salida entre fronteras difusas?

—Este es un mundo sórdido con el cual hay que terminar. Una sociedad debe ser capaz de una gran dosis de unidad para reaccionar frente a esto y terminar

—Lo peor son los juicios tremendistas fuera de contexto. Estamos viviendo una transición extraordinariamente sana y eso lo decían todos hace diez días. Pero ahora se dan una voltereta en el aire y pasan del optimismo más extremo al pesimismo más abyecto. Aquí debemos tener un sentido de la proporción y de la medida. Esta transición es notable desde el punto de vista de la economía, de los grados de tolerancia, de civilización entre los partidos políticos. Tenemos situaciones que nos desagradan y que creemos injustas como la existencia de senadores designados, el sistema electoral, los municipios no democráticos. Pero en medio de todo eso, la transición chilena se caracteriza por un enorme sentido de respeto entre las fuerzas políticas.

—¿Pero comparte la impresión de que, a la hora del diagnóstico político, el gobierno ha llegado a un "alto" importante? ¿Se dobló la esquina?

—Uno no puede, a propósito de un hecho repugnante y cobarde como es el asesinato de Jaime Guzmán, llegar y borrar lo que es un proceso muy exitoso. Tengo la convicción más absoluta de que el país y el gobierno no variará su ritmo, su rumbo, que es el adecuado, que es sano. El país quiere la democracia, la reconciliación, el respeto a los derechos humanos, los militares fuera de la política. Quizás la tarea sea más dura, pero no

habrá modificaciones en ese sentido.

—Los estudios y encuestas revelan que más que por los acuerdos entre los partidos políticos, los chilenos están preocupados por la delincuencia, la violencia. Quieren sentirse protegidos, seguros.

—Este gobierno tiene pocos problemas, pero su gran problema es el de la seguridad pública. Y espero que en esta materia enfrentemos el tema con elevación y entendamos que ésta es una tarea nacional y no un tema del cual se pue-

dante en jefe. En ese cuadro nuestras prioridades eran otras. Teníamos que hacer reformas importantes en el orden tributario, laboral. Había que adecuar ciertas estructuras institucionales, jurídicas. Y el problema de seguridad no pareció tan urgente.

—Con todos esos elementos, ¿cómo advierte el futuro político?

—El gobierno ha tenido éxito en muchas materias, y estoy seguro de que también lo tendrá en el campo de la seguridad pública. La dotación a Carabineros e Investigaciones ha aumentado, se han destinado más fondos. Pero esto no es sólo cuestión de dinero. Debe darse también una calificación de recursos humanos, la formación y capacitación de un

carabinero, por ejemplo, que es un profesional, toma tiempo. Lo que uno más quisiera, en el caso del asesinato de Guzmán, es ver las caras de los asesinos, conocer sus identidades, sus historias, sus trayectorias políticas. Todos queremos eso. Pero que me digan quién —cuando había todo el poder en Chile— esclareció el asesinato de Orlando Letelier, de los dirigentes comunistas, de Tucape Jimenez. La ineficacia de los servicios policiales ha sido sistemática. Entonces, no pueden pedir que un gobierno que recién asume, entregue de la noche a la mañana una solución total a este problema. •

"Aquí hay una ultraizquierda que sabe que la democracia es su muerte política; y una ultraderecha que añora la dictadura, la violencia de otro signo".

den sacar dividendos menores sobre la base de declaraciones rimbombantes e injustas. Para mí, la prioridad de este gobierno hoy es la seguridad pública. Tampoco creo que se puedan tener vacilaciones en crear una policía política eficiente porque aquí están de por medio demasiadas cosas.

—¿Al fin de cuentas, es cuestión de prioridades?

—Tal vez hicimos, en un comienzo, una apuesta mayor a la racionalidad. Recibimos una economía sobrecalentada. Teníamos una situación insólita ante hechos como que el ex dictador permanece inamovible en el cargo de coman-

comida natural

El huerto de noche

Orrego Luco 054. Providencia. Teléfono: 2332690



Recordatorio a Supremos

Señor director:

Me sorprende en extremo que los ministros de la Corte estén tan temerosos, sintiéndose en peligro.

Me permito recordarles que el 11 de septiembre de 1973 millones de chilenos fuimos castigados con arresto domiciliario por 2 ó 3 días.

Que estos mismos chilenos pasamos largo tiempo muertos de pánico, porque teníamos que regresar a nuestras casas antes de cierta hora y no podíamos estar seguros de poder lograrlo.

Que nos aterrábamos cuando tropezábamos con vehículos llenos de uniformados que nos amenazaban a todos, apuntándonos con sus armas.

Que temblábamos por la suerte de algún amigo o pariente a quien buscábamos sin encontrarlo.

Que durante muchos años debíamos cuidar nuestras palabras, porque podíamos ser tachados de "comunistas" y eso era peligroso.

Que los amigos se distanciaban porque "se teñían".

Que temíamos de vecinos o compañeros de trabajo, porque cualquier hecho banal se convertía en una calumnia que nos condenaba a la cesantía o a algo peor. Sin justicia, es lo mismo ser inocente que culpable.

Vivimos años aterrados, sin haber cometido la más ligera falta. ¿Se preocuparon los ministros de asegurarnos su protección? ¿Expresaron en voz alta aquello de que "el que nada malo hace, nada malo debe temer"?

No acepto que sean agredidos, pero quisiera que reconocieran, aunque fuera tácitamente, que no nos dieron las garantías a que estaban obligados.

María Mercedes Jiménez de Vergara

Agradece testimonio

Señor director:

Acabo de terminar de leer el testimonio de Luz Arce y, desconociendo su dirección, desearía que su revista fuera portavoz de un mensaje de gratitud y felicitaciones por tan valerosa cooperación.

Si bien es cierto que un porcentaje de chilenos no vivió situaciones como las descritas, sí fuimos muchos los que vivimos separaciones de familias, desaparecimientos e incluso posteriores persecuciones; sin embargo, y evocando las palabras del Santo Padre, somos un país de entendimiento y no de enfrentamiento, y testimonios como los de la señora Arce nos acercarán más a una reconciliación nacional.

Sinceramente, agradezco la entereza del testimonio y, aunque no borre el pasado,

ayudará para que nunca más en Chile tengamos que escuchar arrepentimientos como éstos.

Una ciudadana no sólo de conciencia

Cartas de Orillia

Señor director:

Le escribo como miembro de Amnistía Internacional, la organización mundial por los derechos humanos. Amnistía tiene grupos en Canadá.

Muchos canadienses estamos enterados respecto a la situación de los prisioneros políticos en Chile. Estamos complacidos de que el gobierno civil haya retornado a su país. Pero también reconocemos que permanecen muchas injusticias. Nuestro grupo de Amnistía está en conocimiento de un caso en particular: el de Wladimir Mancilla Adasme. El ha estado preso durante seis años, por cargos que Amnistía Internacional cree infundados.

Incluyo dos noticias tomadas del diario local que muestran el conocimiento que los orillianos tienen de este caso. Estudiantes de las escuelas secundarias locales han participado en una campaña epistolar. Un total de más de 600 cartas pidiendo por un nuevo y limpio juicio ha sido enviado al Presidente Aylwin y al Senado.

Estaría muy complacido de proporcionar información adicional considerando el trabajo que estamos haciendo por la liberación de Wladimir Mancilla Adasme.

Peter Humbrell
Orillia, Canadá

Cesantía y CNI

Señor director:

Con mucha atención he leído el artículo correspondiente al aumento de la inseguridad ciudadana en los últimos meses (APSI 378), concordando plenamente con el autor del reportaje, que ha demostrado una real preocupación por el tema, entregando a los lectores un trabajo de categoría, característico de este prestigioso medio de comunicación.

En parte del artículo, el autor atribuye a ex miembros de la tristemente célebre CNI la autoría de algunos de los delitos que preocupan a la policía. Sobre esta materia, me atrevería a dar mi opinión.

Por todos es sabido que, en noviembre de 1990, el Congreso aprobó una partida presupuestaria destinada a mantener en las filas del Ejército a aproximadamente mil ex funcionarios de la CNI, quedando una cantidad

cuya cifra desconozco sin poder gozar de este inmerecido beneficio, y por ende, en la cesantía. Probablemente, algunos de esos CNI cesantes son a los que se alude en el reportaje.

Sobre el particular, creo que sería necesario que las autoridades mantuvieran por largo tiempo en las filas del Ejército a esos mil "y tantos" ex CNI, con el fin de tenerlos controlados y a la vez reeducarlos.

Sé que mi planteamiento será duramente criticado por una amplia mayoría de chilenos, que al igual que yo, fuimos víctimas de la dictadura de una u otra forma. Dirán que esa gente no merece ser miembros de una institución de las fuerzas armadas, o que no es justo que torturadores sean pagados con los impuestos de chilenos. Si dicen eso, tienen razón.

Pero más importante es tener presente que esas mil personas "sin Dios ni ley", están más controladas y por ende anuladas, si se les mantiene como funcionarios militares, ya que de enviarlos a la cesantía, de seguro volcarán todos sus conocimientos y su falta de moralidad y escrúpulos a actividades conspirativas o simplemente delictivas, con un costo mucho más alto para la democracia que cancelarles un sueldo.

Juan J. Andrade Spinosa
Ingeniero civil

Picardía, no pornografía

Señor director:

Al saludarlo quiero manifestar mi total desacuerdo con la periodista del artículo "Lujurias de papel" (APSI 379).

Al ser lector de La Papaya, además de APSI, creo que el enfoque que ustedes manifiestan es errado por múltiples razones.

En primer lugar me parece de pésimo gusto criticar hasta el papel de otra publicación (si miramos retrospectivamente, APSI en sus buenos tiempos usaba un papel similar).

Lo que realmente importa, "el contenido": he examinado mi colección y efectivamente no son revistas pornográficas como la periodista lamenta, sino pícaras y cuando mucho eróticas.

El otro insulto de su periodista a los lectores de La Papaya es que tenemos prejuicios de clase media. Quizás tenga razón, pero no debe olvidar que en Chile es la clase mayoritaria y también tenemos derecho a reírnos de los dibujos de dibujantes chilenos (y quizás también de clase media) sobre Pedro Urdemales, Bolaf, La Papayita, Quilico, etcétera.

Ahora la gran diferencia entre APSI y La Papaya es que una es para informarse y pensar y la otra sólo para divertirse.

Manuel Guzmán Reyes
Santiago